S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 28
O R D I N A R I A
LUNES 24 DE MARZO DE 2025

En la Ciudad de México, siendo las doce horas con diecisiete minutos del lunes veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para celebrar sesión pública ordinaria las señoras Ministras y los señores Ministros Presidenta Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.

El señor Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y la señora Ministra Ana Margarita Ríos Farjat no asistieron a la sesión por gozar de vacaciones, el primero al haber integrado la Comisión de Receso correspondiente al primer período de sesiones de dos mil diecinueve y la segunda al haber integrado la Comisión de Receso correspondiente al segundo período de sesiones de dos mil veinticuatro.

La señora Ministra Presidenta Piña Hernández abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número veintisiete ordinaria, celebrada el jueves veinte de marzo del año en curso.

Por unanimidad de ocho votos el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco:

I. 505/2023

Controversia constitucional 505/2023, promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California, demandando la invalidez del artículo 46 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, reformado mediante el DECRETO No. 292, publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. En el proyecto formulado por el señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se propuso: *“PRIMERO. Es procedente y fundada la presente controversia constitucional. SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 46 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, reformado mediante el DECRETO No. 292, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, la cual surtirá sus efectos generales a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de dicho Estado. TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Baja*

California, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta”.

La señora Ministra Presidenta Piña Hernández abrió la discusión en torno a los considerandos del primero al sexto relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación activa, a la legitimación pasiva, a la precisión de la litis y a las causas de improcedencia y sobreseimiento.

El señor Ministro Laynez Potisek se manifestó a favor del proyecto.

Sugirió corroborar, en el párrafo 37, si la Ley Orgánica de la Administración Pública de Baja California aún prevé la representación del Poder Ejecutivo local por el Secretario General de Gobierno, adicional a la Consejería Jurídica y, de ser así, corregir el engrose correspondiente.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo aceptó la sugerencia realizada.

La señora Ministra Presidenta Piña Hernández sometió a votación la propuesta modificada de los considerandos del primero al sexto relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación activa, a la legitimación pasiva, a la precisión de la litis y a las causas de improcedencia y sobreseimiento, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de ocho votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres

Guadarrama, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo presentó el considerando séptimo, relativo al estudio de fondo. El proyecto propone declarar la invalidez del artículo 46 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California; ello, en razón de que la autorización para portar armas de fuego compete exclusivamente a la Federación, por lo que, al haberse legislado sobre la autorización para portar armas para quienes ejercen funciones de seguridad, incluso estando fuera del servicio, invadió dicha competencia.

Se retoma la reforma constitucional de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve en materia de seguridad pública, puntualmente al artículo 21, párrafos noveno y décimo, constitucional, el cual contempla las bases en materia de seguridad pública y dispone que la seguridad pública es una función concurrente del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, y si bien no se contiene un mandato expreso competencial para la materia de portación de armas, en la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza se precisaron las previsiones mínimas requeridas, fijadas por el Constituyente, respecto de la regulación de armas en su artículo 16; sin embargo, este solamente establece la facultad de las instituciones de seguridad para emitir protocolos de actuación y manuales de técnicas para el uso de la fuerza, así como la obligación de

capacitar para el uso de armas de fuego a fin de limitar al máximo su uso, por lo que, de la lectura integral de esta ley se puede concluir que su objeto es establecer normas generales bajo las cuales los integrantes de las instituciones de seguridad pueden hacer uso de la fuerza y utilizar el armamento oficial para el desempeño de sus funciones, sin que ello implique que el Congreso Federal haya excluido la posibilidad de que los integrantes de los cuerpos de seguridad porten armas estando fuera del servicio, siempre y cuando se presente en el ejercicio de funciones de seguridad y, consecuentemente, se concede a la Federación la facultad de regular lo inherente a la portación y uso de armas de fuego en el ejercicio de la función de seguridad.

Recordó que este Tribunal Pleno abordó este tema al resolver la acción de inconstitucionalidad 3/96, donde se analizó todo lo relacionado con la adquisición de armamento y municiones, así como su control, registro y permisos para su portación, concluyendo que la materia es del orden federal, conforme a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La señora Ministra Ortiz Ahlf coincidió con la conclusión de que se invadió la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia de armas de fuego, incluidas las reglas sobre su portación.

Indicó que los artículos 41, fracción IX, y 125, párrafo primero, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen la obligación de las personas

que ejercen funciones de seguridad pública de hacer uso racional del armamento asignado sólo en el desempeño del servicio, así como en el deber de portar dichas armas conforme a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Por su parte, la Ley Nacional Sobre Uso de la Fuerza, en su artículo 15, último párrafo, dispone que, en todos los casos, las armas que autoricen para los cuerpos de policía deberán apegarse a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 24 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el cual señala que las condiciones y requisitos para la portación de armas de fuego son los que se establecen en dicha ley y en las demás disposiciones legales aplicables. Además, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos prevé que, para la posesión y portación de armas de fuego, se requiere necesariamente de licencias particulares u oficiales, ya sean individuales o colectivas expedidas por las autoridades federales, particularmente su artículo 29, el cual dispone que la Secretaría de la Defensa Nacional expedirá licencias oficiales colectivas a favor de las instituciones policiales, las cuales las asignarán, en lo particular, a su personal operativo mediante credenciales vigentes, que se asimilarán a licencias individuales.

Añadió que el Congreso local también invadió las competencias de la Federación, toda vez que instituyó una modalidad, dentro de la expedición de licencias oficiales de portación de armas de fuego, equiparable a una licencia particular, pues se permite al servidor público usar el armamento fuera de servicio, en otras palabras, para

cuestiones ajenas al cumplimiento de sus obligaciones. Si bien los motivos del legislador local resultan plausibles, al orientarse a proteger a las personas que desempeñan funciones de seguridad cuando se encuentren expuestas a recibir ataques en contra de su vida e integridad, así como la de su familia, no se debe desatender la competencia de la Federación, por lo que votará por la invalidez propuesta, pero con estas consideraciones adicionales.

La señora Ministra Batres Guadarrama concordó con la invalidez de la norma propuesta porque, a partir de la referida reforma constitucional en materia de seguridad pública, corresponde a la Federación regular la portación y uso de armas de fuego en el ejercicio de la fuerza pública y, conforme a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la portación de armas de fuego para quienes desempeñen funciones de seguridad se circunscribe al ejercicio del cargo, siendo que, como indica el proyecto, la norma impugnada es inconstitucional porque extiende la autorización de portar armas de fuego a un contexto ajeno al ejercicio de las funciones de seguridad, además de que implicó legislar sobre un régimen alterno para portar un arma de fuego fuera de la función de seguridad pública local.

La señora Ministra Presidenta Piña Hernández se sumó al sentido del proyecto, pero apartándose de las consideraciones porque el actor hizo valer argumentos, reclamando la vulneración de sus facultades para expedir permisos de portación de armas de fuego, siendo que la

Secretaría de la Defensa está encargada de expedir las licencias para portación de armas de fuego y la Secretaría de Gobernación asiste en los casos relacionados con licencias colectivas solicitadas por instituciones policiales, ambas dependencias del Ejecutivo Federal, por lo que la norma combatida, al permitir que el titular de la institución policial local otorgue permisos de portación para los casos en que los funcionarios se encuentren fuera de servicio, se transgreden claramente las atribuciones del Poder Ejecutivo actor. Anunció un voto concurrente.

La señora Ministra Presidenta Piña Hernández sometió a votación la propuesta del considerando séptimo, relativo al estudio de fondo, consistente en declarar la invalidez del artículo 46 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, la cual se aprobó por unanimidad de ocho votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf con consideraciones adicionales, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández por consideraciones diversas. El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena y la señora Ministra Presidenta Piña Hernández anunciaron sendos votos concurrentes.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo presentó el considerando octavo, relativo a los efectos. El proyecto propone determinar que la declaratoria de invalidez surta sus efectos generales a partir de la notificación de los puntos

resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Baja California.

La señora Ministra Presidenta Piña Hernández sometió a votación la propuesta del considerando octavo, relativo a los efectos, consistente en determinar que la declaratoria de invalidez surta sus efectos generales a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Baja California, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de ocho votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández. La señora Ministra Presidenta Piña Hernández anunció voto concurrente.

Previo requerimiento de la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, el secretario general de acuerdos precisó que no hubo cambios en los puntos resolutivos que regirán el presente asunto.

La señora Ministra Presidenta Piña Hernández sometió a votación la congruencia formal de los puntos resolutivos, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de ocho votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.

La señora Ministra Presidenta Piña Hernández declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

El secretario general de acuerdos dio cuenta del asunto siguiente de la lista oficial:

II. 197/2023

Acción de inconstitucionalidad 197/2023, promovida por diversas diputadas y diputados del Congreso del Estado de Chihuahua, demandando la invalidez de los artículos 67, párrafo primero, 68, párrafo primero, y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, reformados mediante el DECRETO No. LXVII/RFLEY/0595/2023 XI P.E., publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el diecinueve de agosto de dos mil veintitrés. En el proyecto formulado por la señora Ministra Yasmín Esquivel Mossa se propuso: *“PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 68, párrafo primero y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, publicados en el Periódico Oficial de dicha entidad el diecinueve de agosto de dos mil veintitrés. TERCERO. Se declara la invalidez del artículo 67, párrafo primero, en la porción normativa “y podrán reelegirse”, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el diecinueve de agosto de dos mil veintitrés. CUARTO: La declaratoria de invalidez surtirá efectos a partir de la notificación de los puntos resolutive al Congreso del estado de Chihuahua. QUINTO: Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la*

Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua”.

La señora Ministra Presidenta Piña Hernández sometió a votación la propuesta de los apartados del I al IV relativos, respectivamente, a la competencia, a la precisión de las normas reclamadas, a la oportunidad y a la legitimación, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de ocho votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.

La señora Ministra ponente Esquivel Mossa presentó el apartado V, relativo a las causas de improcedencia y sobreseimiento. El proyecto propone declarar infundada la hecha valer por el Poder Ejecutivo local en el sentido de que la acción es improcedente contra la promulgación del decreto que contiene disposiciones reclamadas; ya que sí participó en la promulgación de las reformas cuestionadas.

La señora Ministra Presidenta Piña Hernández se separó de los párrafos 32, 33 y 34, donde se diferencia a la acción de inconstitucionalidad 160/2023, pues existe un criterio más reciente a partir de la resolución de las diversas 101/2022, 176/2023 y 177/2023 y su acumulada.

La señora Ministra Ortiz Ahlf compartió el proyecto por sostenerse en los precedentes de este Tribunal Pleno, recientemente en la controversia constitucional 448/2023, en

el sentido de que las normas reclamadas no reglamentaban la organización ni el funcionamiento interno del órgano legislativo, por lo que el Poder Ejecutivo se encontraba en posibilidad de ejercer su facultad de veto.

Añadió que, contrario a lo alegado por la accionante, esta Suprema Corte ha sostenido que la facultad de veto es un mecanismo de participación del Ejecutivo en el procedimiento legislativo mediante la remisión al Congreso de información, objeciones y cuestionamientos adicionales que pudieran no haberse tomado en cuenta en el momento de discutirse la iniciativa durante el procedimiento respectivo, por lo que se trata de un medio de control político o neutralizador del ejercicio del Poder Legislativo a efecto de procurar un equilibrio entre los Poderes y, por tanto *prima facie*, la naturaleza, objeto y concepción de la facultad del veto no se ajusta a un control de tipo jurídico o de regularidad para la protección de los derechos humanos, puesto que esa no es su finalidad principal.

Concluyó que, en el caso, no resultaba procedente inaplicar la prohibición de emitir observaciones a las leyes o decretos del Congreso local por parte del Ejecutivo de la entidad, contenida en el artículo 64, fracción XLIII, párrafo segundo, de la Constitución Local, por lo que estará a favor del proyecto con estas consideraciones adicionales.

La señora Ministra Presidenta Piña Hernández recordó que únicamente se presentó el apartado de causas de improcedencia y sobreseimiento.

La señora Ministra Presidenta Piña Hernández sometió a votación la propuesta del apartado V, relativo a las causas de improcedencia y sobreseimiento, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de ocho votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández separándose de los párrafos 32, 33 y 34.

La señora Ministra ponente Esquivel Mossa presentó el apartado VI, relativo al estudio de fondo, en su tema 1, denominado “Omisión de la Gobernadora de hacer observaciones, conforme al artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua”. El proyecto propone declarar infundados los conceptos de invalidez respectivos.

Recordó que se esgrimieron dos conceptos de invalidez. En el primero, se alegó la omisión de la gobernadora de hacer observaciones conforme al artículo 70 de la Constitución Local, sin que fuera obstáculo la limitante prevista en el artículo 64 de la Constitución estatal, en el sentido de que la ley que regula el funcionamiento interno del Congreso no podrá ser objeto de observaciones, ya que dicha restricción, según los accionantes, no opera cuando se trata de violaciones a la propia Constitución Local. El proyecto propone declarar infundados estos conceptos de invalidez porque, en diversos precedentes, este Alto Tribunal ha concluido que, si bien la facultad de formular observaciones a las leyes aprobadas por los Congresos

locales propicia un adecuado balance en el ejercicio del poder público, existen supuestos en los que no es posible ejercer dicha atribución, como la fracción XLIII del artículo 64 de la Constitución Local.

En el segundo, se alegó la presunta vulneración al artículo 202 de la Constitución estatal, el cual establece el procedimiento para adicionar y reformar la propia Constitución. Se declara infundado este argumento, ya que los preceptos impugnados se encuentran contenidos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo local, por lo que los legisladores no tenían que cumplir con dicho procedimiento especial.

La señora Ministra Presidenta Piña Hernández sometió a votación la propuesta del apartado VI, relativo al estudio de fondo, en su tema 1, denominado “Omisión de la Gobernadora de hacer observaciones, conforme al artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua”, consistente en declarar infundados los conceptos de invalidez respectivos, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de ocho votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.

La señora Ministra ponente Esquivel Mossa presentó el apartado VI, relativo al estudio de fondo, en su tema 2, denominado “Vulneración al artículo 61 de la Constitución

del Estado de Chihuahua”. El proyecto propone, por una parte, declarar la invalidez del artículo 67, párrafo primero, en su porción normativa ‘y podrán reelegirse’, y, por otra parte, reconocer la validez de los artículos 68, párrafo primero, y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua.

La propuesta de invalidez obedece a que el precepto cuestionado contraviene abiertamente el párrafo segundo del artículo 61 de la Constitución local, el cual limita la permanencia de las personas que ocupen la mesa directiva a un solo año, en términos del segundo párrafo del artículo 116 de la Constitución General, el cual ordena a los Poderes de los Estados a organizarse conforme a la Constitución de cada uno de ellos, por lo que el legislador local estaba impedido para introducir la figura de la reelección de quienes conforman la mesa directiva del Congreso local sin antes haber reformado su propia Constitución.

El reconocimiento de validez responde a que, al haberse eliminado la porción normativa antes indicada, resulta innecesario invalidar estas dos disposiciones porque el problema de constitucionalidad detectado ha quedado subsanado.

La señora Ministra Ortiz Ahlf concordó con la conclusión del proyecto, pero por consideraciones distintas porque, de conformidad con el artículo 116 constitucional, las entidades federativas cuentan con libertad configurativa para regular la integración y funcionamiento de los órganos

pertenecientes a sus Congresos, siempre y cuando se observen puntualmente los parámetros y directrices establecidos en la Constitución General; no obstante, el sistema normativo impugnado viola el principio de seguridad jurídica, toda vez que no es claro en determinar si la reelección de las personas integrantes de la mesa directiva del Congreso local será consecutiva o alterna, ni se limita el número de períodos en que dicha integración podrá reelegirse ni se prevé si la reelección será en las mismas posiciones, por lo que votará por la invalidez de todos los preceptos reclamados.

La señora Ministra Presidenta Piña Hernández se manifestó en contra del proyecto, en congruencia con su voto en la acción de inconstitucionalidad 144/2022, en el sentido de que el artículo 116, párrafos primero y segundo, constitucional no permite, en una acción de inconstitucionalidad, emplear como parámetro de regularidad el texto de la Constitución Local, pues ello, en todo caso, sería materia de un control de constitucionalidad local y, por lo tanto, debe desestimarse el planteamiento de los accionantes que, en esencia, argumentan una antinomia entre los preceptos impugnados de la ley reclamada y el artículo 61 de la Constitución local.

Añadió que no advierte ninguna antinomia entre los preceptos impugnados y el citado artículo 61, en tanto que la duración del cargo de los integrantes de la mesa directiva de ningún modo excluye la posibilidad de que, al concluir su

período, puedan volver a ser electos para integrarla nuevamente, aunado a que el principio de pluralidad se refleja en que, al integrar cada mesa directiva, se debe procurar que todas las fuerzas políticas estén representadas, pero ello no quiere decir que cada año tengan que cambiarse a las personas o fuerzas políticas que se integrarán a ese órgano de dirección, lo cual, en todo caso, queda dentro de la libertad decisoria del Congreso.

La señora Ministra Presidenta Piña Hernández sometió a votación la propuesta del apartado VI, relativo al estudio de fondo, en su tema 2, denominado “Vulneración al artículo 61 de la Constitución del Estado de Chihuahua”, de la cual se obtuvieron los resultados siguientes:

Se expresó una mayoría de siete votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto de declarar la invalidez del artículo 67, párrafo primero, en su porción normativa ‘y podrán reelegirse’, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua. La señora Ministra Presidenta Piña Hernández votó en contra.

Dado el resultado obtenido, el Tribunal Pleno determinó desestimar el planteamiento consistente en declarar la invalidez del precepto referido, al no alcanzar una mayoría calificada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo

105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se aprobó por mayoría de siete votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Esquivel Mossa, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto de reconocer la validez de los artículos 68, párrafo primero, y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua. La señora Ministra Ortiz Ahlf votó en contra.

Previo requerimiento de la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, el secretario general de acuerdos precisó los cambios en los puntos resolutivos que regirán el presente asunto:

“PRIMERO. Es procedente, pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad.

SEGUNDO. Se desestima en la presente acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 67, párrafo primero, en su porción normativa ‘y podrán reelegirse’, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, reformado mediante el DECRETO No. LXVII/RFLEY/0595/2023 XI P.E., publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el diecinueve de agosto de dos mil veintitrés.

TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 68, párrafo primero, y 73 de la referida Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua.

CUARTO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta”.

La señora Ministra Presidenta Piña Hernández consultó a la señora Ministra ponente Esquivel Mossa si elaboraría el engrose en consecuencia de estas votaciones.

La señora Ministra ponente Esquivel Mossa respondió afirmativamente.

La señora Ministra Presidenta Piña Hernández sometió a votación la congruencia formal de los puntos resolutivos, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de ocho votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.

La señora Ministra Presidenta Piña Hernández declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

Acto continuo, levantó la sesión a las doce horas con cincuenta y cuatro minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Tribunal Pleno para acudir a la próxima sesión ordinaria, que se celebrará el martes veinticinco de marzo del año en curso a la hora de costumbre.

Firman esta acta la señora Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre	NORMA LUCIA PIÑA HERNANDEZ	Estado del certificado	OK	Vigente
	CURP	PIHN600729MDFXRR04			
Firma	Serie del certificado del firmante	636a6673636a6e00000000000000000000000002d5	Revocación	OK	No revocado
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	21/04/2025T19:46:38Z / 21/04/2025T13:46:38-06:00	Estatus firma	OK	Valida
	Algoritmo	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma				
	a0 d6 07 8c 7f 92 4a 0f cb aa fd 95 5a ae 52 ec 2e c5 1b fe c3 fb f9 d6 6e 3b 6c 26 48 ce a7 9f 11 3a 1b 02 7f b7 b0 c5 a2 91 6e 70 39 b6 30 28 50 6d c1 1c ad bb 85 c9 25 e7 89 52 66 b2 7b 5b 38 ac 51 05 0f 21 9c 88 d8 cf 67 65 c3 76 62 6b 56 55 c3 b6 d7 b2 3f d1 60 f5 f9 eb a8 3c 90 fa 53 39 21 c8 21 79 81 46 0e c6 b3 ff 74 82 29 6c 6c 49 f5 1b 79 fa 76 55 59 14 17 25 22 a7 a4 de 0f f6 23 f6 22 76 4e 5c b2 16 f5 30 17 bc 9c 90 73 45 ff 40 70 e4 7c 97 8e b7 25 25 db a3 a7 92 42 95 ff 84 6a 41 58 ae b9 c9 77 0a d8 c1 b4 b6 c7 40 ec ba a5 06 f8 f0 dc f0 6f ce b9 f1 6e ed 84 ca 7b b5 05 7d 17 0c de b8 ed a3 26 34 e0 f3 9f 50 00 f6 a0 94 cb 39 c5 d2 c8 e7 12 2e 8f 26 9b 40 6a 45 ef 5b fc 07 13 52 30 53 53 06 f2 44 1e d1 96 4c 87 43 df a6 27 01 a5 5a b1 ac 7c a8				
Validación OCSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	21/04/2025T19:46:38Z / 21/04/2025T13:46:38-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP	636a6673636a6e00000000000000000000000002d5			
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	21/04/2025T19:46:38Z / 21/04/2025T13:46:38-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia	8539430			
	Datos estampillados	48792E2B82EBDD5297E7F7D8CB7375BE0847A7D707033CD2785133706048FA41			

Firmante	Nombre	RAFAEL COELLO CETINA	Estado del certificado	OK	Vigente
	CURP	COCR700805HDFLTF09			
Firma	Serie del certificado del firmante	636a6673636a6e000000000000000000000000017d	Revocación	OK	No revocado
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	21/04/2025T18:43:41Z / 21/04/2025T12:43:41-06:00	Estatus firma	OK	Valida
	Algoritmo	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma				
	b3 8b e9 ec 73 62 73 09 b3 d5 73 0d 40 7c 96 6d 82 42 2d 47 49 92 fb 15 39 f9 79 f3 1d 73 93 d6 5b 9c c2 9a 50 c5 88 51 a4 41 cd 76 f4 ff 96 32 f8 53 b9 ff 92 b1 46 27 ff 69 9d 0d 5d 2d 71 81 4a 54 5d 63 4e 32 09 e1 a7 9a ca 7e 87 3f 78 7a ff 6d 1d 87 72 38 30 1b 6b 85 dd fe 15 32 08 b8 58 2b be 75 3d a0 be b1 9e 21 66 1c c4 f7 37 e4 63 02 1b d6 aa 09 b6 3d 05 d9 57 e3 d7 15 31 67 5f af 0a 45 53 b4 3c 93 91 2f 6e 7f da 7c 3d 2b 28 44 b2 76 be 60 f0 f0 60 7b ab bd dc 78 c0 7a b3 0c 28 47 c9 60 85 6d 61 86 d0 fc 63 d8 12 9d 5b ef 3a 5c c0 4d 51 01 38 c4 b5 00 07 4b 7e 6c 6c 93 40 0b 28 37 17 a9 09 3d 79 8b 44 f1 85 eb 3c c4 45 fb b0 72 cf 50 16 e3 e3 18 f0 5f da e5 37 95 0a a1 92 6c 3e 52 60 18 34 c0 b4 52 fc e4 ee c6 0f 2c 0d 42 f3 b7 8e f4 7e e4 55 f5 2c 5f				
Validación OCSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	21/04/2025T18:43:41Z / 21/04/2025T12:43:41-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP	636a6673636a6e000000000000000000000000017d			
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	21/04/2025T18:43:41Z / 21/04/2025T12:43:41-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia	8538161			
	Datos estampillados	0765626B65A3255E46A62AF1C613F40BBA94C1F75814C33BB8F7936F870B32E4			